

# **El Sistema Político Electoral Mexicano de Mayoría Relativa vs El Sistema de Mayoría Absoluta de Segunda Vuelta Electoral en el Ejecutivo Federal.**

*The Mexican Electoral Political System of Relative Majority vs The System of Absolute Majority of Second Electoral Round in the Federal Executive.*

**LIC. RODRIGO CORTÉS ACOSTA**

**Posgrado Integral en Ciencias Sociales. Universidad**

**De Sonora. E-mail: Cortesz11@hotmail.com**

## **INTRODUCCIÓN**

La presente ponencia forma parte de una investigación de posgrado, la cual aún se encuentra en proceso, estableciendo como conceptos clave en la investigación: democracia y legitimidad, desde una perspectiva interdisciplinar, integrando la Sociología, Ciencia Política y el Derecho. A partir de los resultados cuantitativos obtenidos de fuentes y registros oficiales, se partirá de una investigación documental aplicando la hermenéutica en el análisis de contenido, de forma artesanal, utilizando las técnicas de Manuel Montañes (2010), Teun Van Dijk (2005), Krippendorff, K. (1997) y Marradi (2007), para posteriormente; realizar grupos focales compuestos por diez integrantes, así como la realización de entrevistas semi estructuradas a sujetos clave; además de la consideración de estudios previos realizados sobre el tema de la presente investigación, se analizan los estudios empíricos realizados por la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, titulados “Segunda Vuelta Electoral. Estudio Teórico Conceptual, de Derecho Comparado y de Iniciativas presentadas en la materia” (Gamboa; 2007) y “La segunda vuelta electoral, experiencias y escenarios” (González; 2007); entre otros, en los cuáles ya existen precedentes e iniciativas para dar el paso a una reforma electoral donde se legitime de manera sustancial, el proceso de elección popular en el ejecutivo federal mexicano, denotando en mi trabajo de investigación un enfoque distinto al tratado anteriormente en otros proyectos, como lo es, el enfoque interdisciplinar, además de otros aspectos no

tratados antes, como lo son; las consecuencias fácticas en el orden público de no contar con un gobierno federal elegido por la mayoría absoluta.

Partiendo desde una perspectiva interdisciplinar integrando teorías y conceptos de la ciencia política, sociología y el derecho, se pretende crear una homogeneidad con la finalidad de estudiar el actual sistema político-electoral mexicano, es decir; el sistema de mayoría relativa, específicamente en el proceso de elección del ejecutivo federal, toda vez que existen distintas discrepancias e incongruencias entre las teorías más fuertes sobre legitimidad y democracia y la sustancialidad de los procesos electorales en México. El objetivo de la presente investigación será analizar distintas posturas y explicar cómo distintas visiones disciplinares se van integrando para formar un objetivo común, además de guiar al lector por medio de una visión interdisciplinar con la finalidad de proponer un posible cambio hacia un sistema político electoral de mayoría absoluta por medio de “una segunda vuelta electoral” en México, con la finalidad de que por medio de una perspectiva interdisciplinar, se puedan subsanar las lagunas y argucias legaloides existentes en nuestro actual sistema, que agravan la soberanía popular y el debido proceso electoral, para de esta manera, brindar un proceso, percepción y gobierno legítimo e íntegro desde distintas visiones disciplinares y no sólo del derecho como actualmente prevalece, ya que si revisamos y estudiamos todo únicamente desde el punto de vista del derecho, todo está y estará siempre casi perfecto y legitimado totalmente, y nunca podremos avanzar en democracia, sin embargo, debemos tener presente que por su naturaleza, las leyes se auto-legitiman a sí mismas, sin considerar si en verdad ejercen justicia real o no, ya que la justicia engloba muchos factores que van más allá de sólo las leyes; y ante la duda entre hacer valer las leyes o la justicia, siempre debe prevalecer la justicia, ya que las leyes se hicieron para hacer justicia y no la justicia para las leyes, he aquí la distinción e importancia de esta visión interdisciplinar en este ámbito.

En México, en los últimos años, durante los distintos procesos electorales pasados; específicamente en los procesos para elegir al ejecutivo federal, las cifras oficiales muestran que la mayoría absoluta (más de la mitad) de la ciudadanía votante, no elige al candidato que resulta ganador en las elecciones. La razón de esto es que el diseño de nuestro actual sistema político-electoral mexicano es un sistema de mayoría relativa (minoría absoluta) que establece como ganador en una primera y única instancia al que obtenga mayor cantidad de votos, sin importar que más de la mitad de los votantes (algunas veces casi el doble de los que votaron por el candidato ganador oficial) no hayan votado por el que formalmente se establece como ganador. De esta manera se genera, por una parte, una desconfianza o mala percepción mayoritaria en el candidato elegido, que esto conlleva a una ilegitimidad y desobediencia a los actos de gobierno, existen distintos factores que opacan la legitimidad de las autoridades y las instituciones, como bien mencionan Beramendi y Zubieta (2014):

Uno de ellos es la percepción de que el sistema legal es injusto. Cuando las personas perciben que las decisiones tomadas por los jueces no siguen los procedimientos legales correspondientes, tienden a no obedecer o a no creer en los fallos aplicados; y si se las considera una práctica ordinaria, las personas descreen del Poder Judicial en general.

También podemos homologar este criterio a distintas autoridades, entre ellas las administrativas y legislativas, como lo es en materia electoral, y no es que desconozcamos a las autoridades por anarquía o porque no nos convenga simplemente, sino que todo poder debe ser legitimado por el mismo pueblo como la misma ley lo exige, además, si no se hiciera de esta manera, es importante percibir que las normas legales o formales están subsumidas por normas sociales (como la legitimidad) que regulan y estipulan un funcionamiento social más complejo y subjetivo sobre el cumplimiento normativo, brindando una armonía social interna en el cumplimiento de la ley formal. Por lo que, más allá de la estricta formalidad de las normas, si no hay regulación social que las respalde o acepte de alguna manera, no funcionarían; hasta convivirán y generarán conductas contrarias en el sistema mismo bajo la clandestinidad o incluso, ante la luz de todos, a manera de costumbre o convencionalismo social, como ya pasa actualmente en México en distintas actividades ilícitas. (Beramendi y Zubieta, 2014; Zelditch, 2001, Fehr y Fischbacher, 2004).

En paralelo a lo anterior, respecto a nuestro actual Sistema Federal Electoral de Mayoría Relativa de elección popular, podemos establecer el agravio fáctico a la soberanía nacional que esencialmente reside del pueblo, así como la voluntad del pueblo a constituirse como una república democrática, como lo establecen los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la soberanía nacional, así como una república democrática no existen sustancialmente, toda vez que ésta reside en la voluntad del pueblo y si la mayoría de éste no elige o acepta a su representante oficial, tanto la soberanía nacional como la república democrática a las que alude la constitución, son nulas, además, si queremos una nación de paz y orden, podemos decir que el modelo más eficaz para que la gente respete las normas es la legitimidad de las autoridades y las instituciones (Beramendi y Zubieta, 2014; Tyler, 2001) .

La presente investigación se realiza con una perspectiva interdisciplinar, partiendo de la integración de teorías y conceptos desde la rama del derecho, la sociología y la ciencia política. Además; desde un enfoque de corte cualitativo, por medio de la implementación de entrevistas semi-estructuradas a sujetos clave, método delphi y grupos focales para conocer la opinión social respecto a los últimos procesos electorales en los últimos años sobre el sistema político-electoral de mayoría relativa (minoría absoluta) y su legitimidad en el proceso de elección del ejecutivo federal, y a manera de propuesta, con la finalidad de subsanar las deficiencias y violaciones mencionadas, analizar la posible implementación de un Sistema de Mayoría Absoluta por medio de una segunda vuelta electoral en México.

### **Objetivo General.**

Analizar la eficacia de los mecanismos procedimentales que contemplan actualmente las leyes electorales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar la democracia sustantiva y una representación eficaz y legítima, por medio de la participación popular mayoritaria en el proceso de elección del poder ejecutivo federal mexicano.

### **Objetivos Particulares.**

\*Analizar la incidencia real del voto popular mayoritario en el resultado final de la elección del poder ejecutivo.

\*Evaluar la legitimidad sustancial y democracia participativa en el sistema político electoral mexicano.

\*Identificar el grado de participación e intervención mayoritaria ciudadana en el proceso para elegir al ejecutivo federal.

\*Proponer parámetros mínimos en el proceso electoral para garantizar que el votante esté representado por sus candidatos y gobierno de una forma legítima, por medio de una representación de mayoría absoluta en el proceso de elección del ejecutivo federal mexicano.

\*Comparar nuestro sistema político electoral mexicano con otros mecanismos electorales de otros países en la elección al ejecutivo federal.

### **Preguntas de Investigación:**

1.-¿Qué consecuencias positivas y negativas tiene el contar con un sistema electoral de mayoría relativa o simple en la elección al ejecutivo federal?

2.-¿El Sistema Electoral de Mayoría Relativa en México afecta la Soberanía Popular establecida por la Constitución Federal?

3.-¿Qué modelo o sistema de representación popular sería el ideal para brindar plena soberanía popular al proceso de elección del ejecutivo federal? y ¿Porque?

### **Delimitación del estudio.**

La presente investigación se delimita exclusivamente a resolver los conflictos de democracia y de legitimidad que se generan en el proceso de elección popular del ejecutivo federal mexicano, perteneciente al sistema político electoral de mayoría relativa. No así a otros procesos electorales en los cuales se concursan distintos puestos de elección popular pertenecientes a este mismo sistema.

### **Limitaciones del estudio.**

El presente estudio al ser una investigación derivada de un tema nacional que abarca todo el territorio mexicano, es complicado obtener datos de recogida en cada ciudad y estado del país, por lo que mucha de la información recabada comprenderá de investigación empírica documental a partir de estadísticas y datos oficiales por las distintas instituciones investidas de fe pública como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

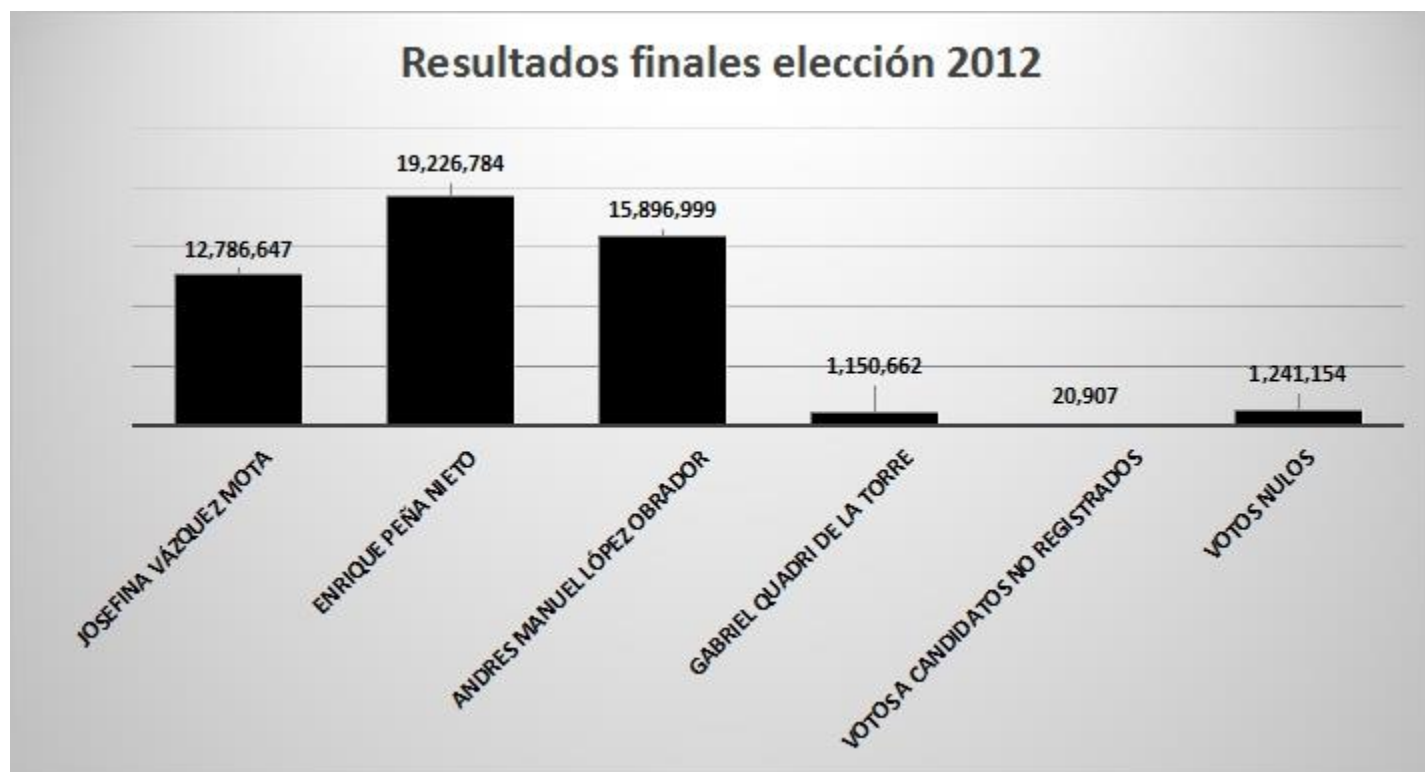
### **Antecedentes.**

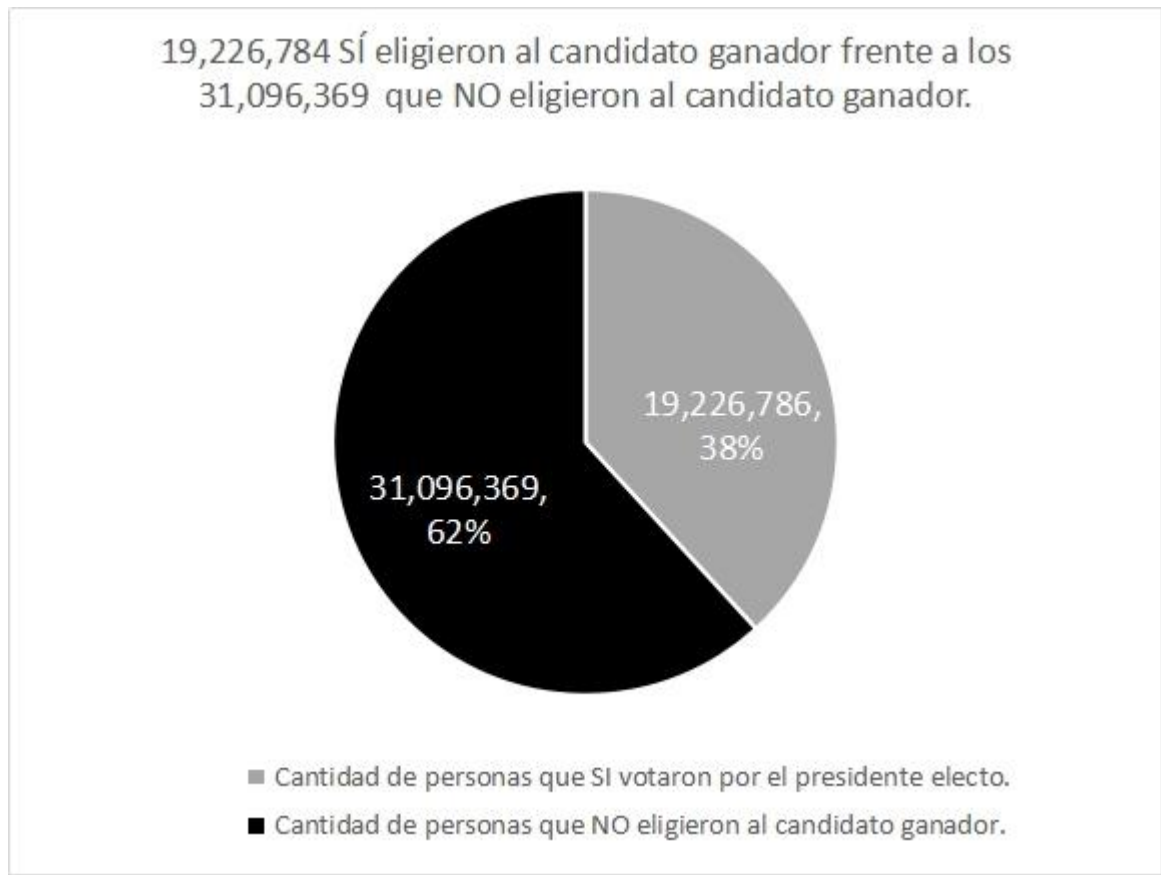
Al tomar como referencia las últimas dos elecciones del ejecutivo federal en México, es decir, las elecciones de 2006 y 2012, podemos encontrar situaciones tales como incongruencias entre los resultados de las actas físicas y el cómputo electrónico de votos , además de otras anomalías procesales (Fajuri, Martínez y Myers, 2013), por lo que todas estas inconsistencias electorales se convierten en opacidades sustanciales y formales, que restan eficacia a la legitimidad que nuestro actual sistema electoral pretende proporcionar. De manera ilustrativa podemos basarnos en la más reciente referencia que menciona Corona Nakamura (2013):

La pasada elección presidencial en México, mediante los comicios celebrados el primero de julio de 2012, resultó controvertida y cuestionada por la vía jurisdiccional, sobre la base de la supuesta conculcación de principios constitucionales electorales. Tal situación motivó un interesante análisis integral sobre la calificación de esa elección, cuyo dictamen final que fue aprobado, confluyó en la declaración de validez de la elección y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, a la postre, se advierte que es necesaria la revisión y posible reforma a la norma electoral en rubros tales como la admisión y valoración de pruebas, regulación de encuestas y estudios de opinión, y en materia de sanciones.

Aunado a lo anterior, podemos percatarnos que las cifras finales en la última elección del 2012 para elegir al ejecutivo federal en México fueron las siguientes según el Programa de Resultados Preliminares del aquel entonces Instituto Federal Electoral (2012): Josefina Vázquez Mota: 12,786,647, equivalentes al 25.41%. Enrique Peña Nieto (candidato ganador): 19,226,784, equivalentes al 38.21%. Andrés Manuel López Obrador 15,896,999, equivalentes al 31.59%. Gabriel Ricardo Quadri de la Torre: 1,150,662, equivalentes al 2.29%. Votos a candidatos no registrados: 20,907, equivalentes al 0.4% y finalmente, los votos nulos o inválidos: 1,241,154, proporcionales al 2.47%. Dando un total de votantes de 50,323,153 equivalentes al 100% de votantes, votante (situación muy similar a la elección del 2006 donde se repite la desproporción entre los que no eligieron al ganador y los que sí lo eligieron). Por lo que al revisar las cantidades señaladas, a primera vista parece una elección legítima, ya que el que obtuvo la mayoría simple fue el ganador, sin embargo, si nos ponemos a analizar desde el punto de vista cuantitativo y proporcional que cantidad de votantes no eligieron al candidato ganador, lo obtendríamos de la suma de los votos de los candidatos perdedores, de los candidatos no registrados y de los votos nulos, dando un total de: 31,096,369 votantes que no eligieron al candidato ganador en una primera y única instancia, superando por mucho los 19,226,784 de votantes que sí eligieron al ganador, por lo que actualmente y desde hace muchos años, la vox populi, debido a este sistema de mayoría simple, no se encuentra representada sustancialmente de forma legítima ni mayoritaria en el gobierno. Para una mejor ilustración se elaboraron las siguientes gráficas a partir de

los datos oficiales del IFE en la elección al ejecutivo federal de México del 2012:  
**Figura 1 y 2.**

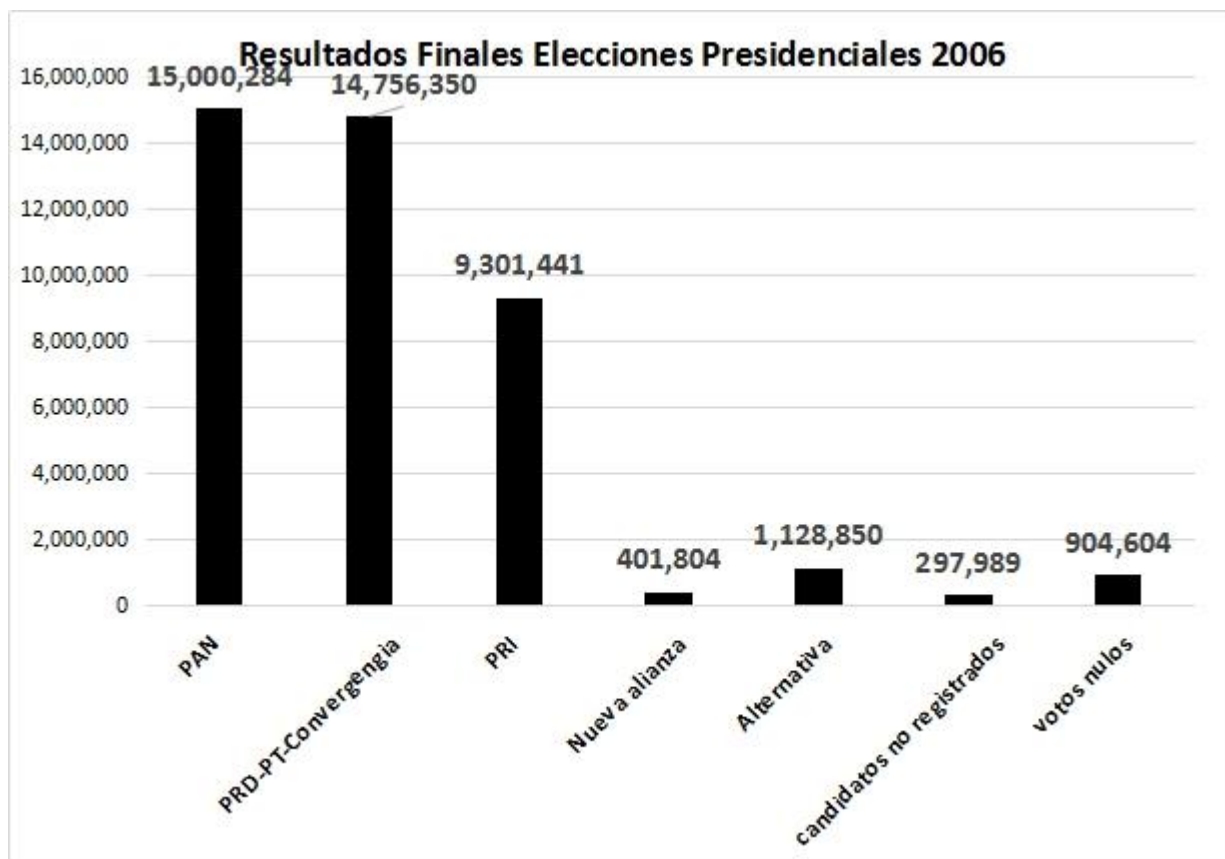




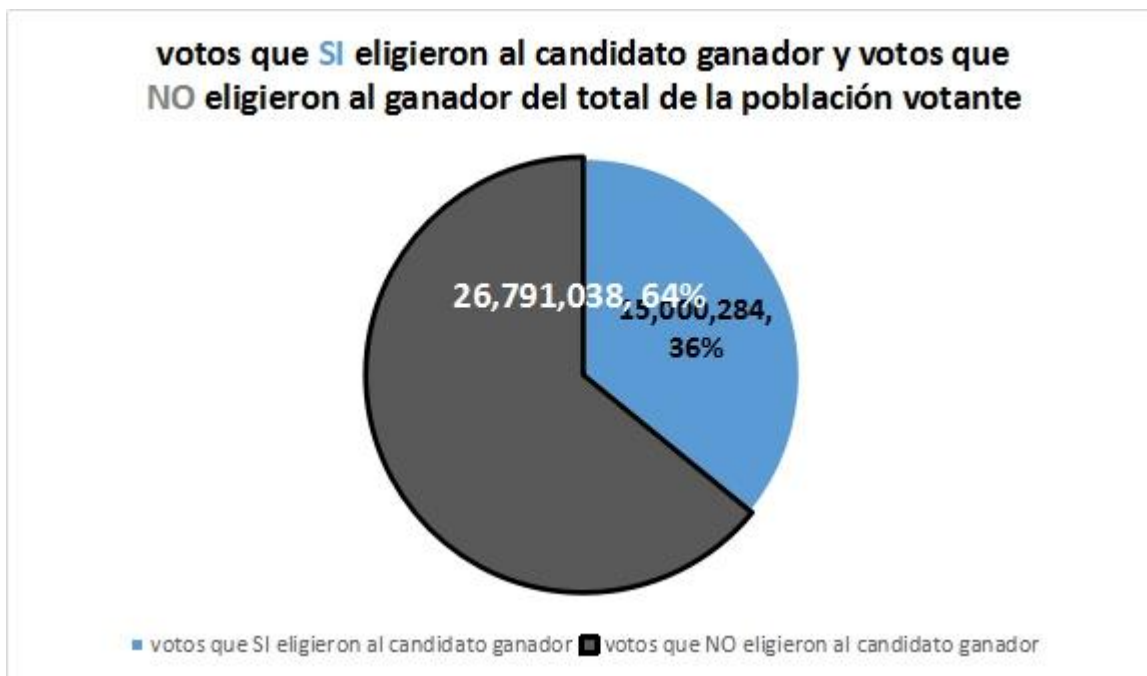
**Figura 2.**

Situación análoga en las elecciones al ejecutivo federal mexicano en el año 2006 en donde según datos oficiales y públicos del Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) el candidato a la presidencia de la república por parte del Partido Acción Nacional obtuvo 15,000,284 de votos equivalente al 35.89% de la población votante; el candidato a la presidencia por parte del Partido Revolucionario Institucional obtuvo una cantidad de 9,301,441 de votos, equivalentes al 22.26%; el candidato por la coalición PRD, PT y Convergencia obtuvo 14,756,350 de votos totales equivalentes al 35.31% de la población votante; con 401,804 la candidata por el partido Nueva Alianza, equivalente al 00.96%; por parte del partido Alternativa 1,128,850, proporcional al 02.70%; además de 297,989 votos dados a candidatos no registrados oficialmente equivalentes al 00.71%; y una votación nula de 904,604 proporcionales al 02.16%; dando un total de 41,791,322 votos totales de participación ciudadana, en donde si sumamos de nueva cuenta la cantidad del segundo, tercero, cuarto, quinto, votos a candidatos no registrados oficialmente y votos nulos, da una cantidad total de **26,791,038** de votos que no eligieron al candidato ganador, contra los **15,000,284** que obtuvo el candidato formalmente ganador en la única instancia que permite nuestro excluyente, actual sistema político electoral mexicano, refrendando la ausencia de una representación mayoritaria, justa y

legítima, trazando nuevamente la brecha para un bajo nivel de aceptación hacia el ejecutivo y sus actos de gobierno. A continuación, se presentan las siguientes gráficas para su mejor explicación: **Figuras 3 y 4.**







De acuerdo a los datos oficiales previos, contamos con un sistema político-electoral que no está cumpliendo con la finalidad para la que fue creado, volviéndose obsoleto e ineficaz para garantizar la legitimidad y una justa representación popular. Según Cienfuegos e Islas (2006):

Las transiciones políticas y gubernamentales en las que nos hemos encontramos reclaman urgentes ajustes procesales e institucionales para que todas las manifestaciones políticas de un nuevo episodio —que pretende ser democrático— puedan fluir por los cauces de la ley por medio de una democracia participativa en donde la clave sea la integración real de la sociedad.

Estas transiciones a que alude el autor, siguen siendo válidas diez años después, toda vez que la sociedad reclama un proceso de elección confiable, abierto e incluyente y no sólo un proceso legítimamente formal, sino también legítimamente sustancial; en donde el voto mayoritario de los ciudadanos sea el que prevalezca en las decisiones políticas y de gobierno, brindando una democracia participativa a los mexicanos, ya que las mismas situaciones fácticas presentadas en los pasados procesos electorales han venido decreciendo o nulificando, como ya hemos venido señalando, la confianza que tienen los ciudadanos hacia las instituciones y hacia los actos de gobierno.

### **Planteamiento del Problema**

En México el diseño normativo del sistema político electoral actual no garantiza la prevalencia del voto mayoritario al momento de la elección de sus representantes en el

poder ejecutivo federal. El artículo 41 de la Constitución Política Mexicana y el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalan el procedimiento para la elección del candidato ganador en la contienda presidencial, lo anterior se traduce en el hecho de que al momento de la contabilización de los votos, es electo el candidato que tenga la mayoría simple, lo que resulta en que la mayoría proporcional (cuantitativamente hablando) representadas generalmente en los votos dados a los candidatos que obtuvieron el segundo, tercer, cuarto y sucesivos lugares, quedan al margen (independientemente de que la diferencia entre el primero y segundo lugar u otros sea mínima) provocando que las personas que votaron por esos candidatos, no tengan una representación significativa y no lleguen a incidir o trascender en la elección final, debido a que el sistema actual establece como ganador en una única instancia al primer lugar, dejando de lado la suma total de sufragios que no votaron por el candidato ganador, sin importar que en la mayoría de las ocasiones, estos sufragios sean superiores en número, que la cantidad de votos obtenida por el candidato electo, es decir, las y los ciudadanos que votaron a favor del segundo, tercer, cuarto y sucesivos lugares, quedan sin representación en dicho proceso. A manera de ejemplo se muestra una gráfica con los resultados finales de la elección al ejecutivo federal del año 2006, según datos oficiales del IFE, y su desproporción en la voluntad mayoritaria a la hora de elegir al representante popular en el ejecutivo: **Figura 6**



La situación antes descrita violenta, por una parte, la soberanía nacional, entendida ésta como la autoridad y voluntad mayoritaria que reside en el pueblo a través de los

órganos de representación (Sartori, 2003), establecida en los artículos 39 y 40 constitucionales que señalan:

**Artículo 39.** La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

*Artículo original DOF 05-02-1917*

**Artículo 40.** Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

*Artículo reformado DOF 30-11-2012*

Por otra parte, nuestro actual sistema político-electoral mexicano, al no garantizar la prevalencia del voto mayoritario absoluto o proporcional a la cantidad de habitantes del país, no asegura el ejercicio de los derechos político-electorales, ni vela por la autenticidad y efectividad del sufragio en términos de lo establecido en el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus incisos d) y f); así como tampoco se garantiza el derecho constitucional a estar democrática y legítimamente representado y que la voluntad popular mayoritaria absoluta prevalezca. (artículos 39, 40 y 41 constitucionales)

Referente a las dos violaciones previamente descritas, podemos establecer que en un resultado electoral, al no estar representada la mayoría absoluta o proporcional de los ciudadanos en México, el ejercicio del poder del candidato elegido en el ejecutivo federal, está sustentado en una legitimidad formal mas no sustancial, ya que, al no estar respaldada o apoyada por la mayoría proporcional de mexicanos, existe sólo una minoría que avala el resultado final que no garantiza el reconocimiento y por tanto la gobernabilidad en el país. Una de las implicaciones de la falta de legitimidad sustancial (o reconocimiento por la mayoría de la población) en las esferas del gobierno es la desobediencia popular y los conflictos sociales emanados de ellas como el rechazo a las políticas públicas y actos gubernamentales.

De acuerdo a Sartori (2003), el principio de mayoría absoluta en una elección, es un cuerpo que representa legítimamente en el ámbito formal y sustancial al pueblo, y que refleja realmente la voluntad de la mayoría.

Según Villafuerte (2008) los modelos de democracia que se han presentado desde el siglo XX a la actualidad, los podemos categorizar en cuatro corrientes: 1.- el modelo de mínimos o del elitismo competitivo (Weber, 1987), 2.- El pluralista o poliárquico (Dahl, 1993, 1997, 1999), 3.- El participativo (Barber, 1995, 2000, Maiz, 2004) y; 4.- El deliberativo (Held, 1992, Vallespín, 2001, Elster, 2001).

De los anteriores modelos me parece pertinente para el caso de mi investigación tomar como referencia y propuesta el modelo participativo de Barber (1995, 2000) y Maiz (2004) mismo que ve a la democracia participativa como aquella que trata de establecer un marco analítico que vaya más allá de las visiones procedimentales de la democracia y la sustenta en un principio de participación social en la vida política, que parte de la lógica de una nueva dinámica de la organización social (Villafuerte 2008).

Respecto a lo anterior, podemos describir a la democracia participativa como la participación y consideración mayoritaria y real de los ciudadanos en las decisiones políticas y de gobierno, más allá de las leyes. De acuerdo a esta visión, (Serrano,1991; Habermas, 1986), describe la legitimidad de la siguiente manera:

El hecho de que un orden político es merecedor de reconocimiento. La pretensión de legitimidad hace referencia a la garantía -en el plano de la integración social- de una identidad social determinada por vías normativas. Las legitimaciones sirven para hacer efectiva esa pretensión, esto es: para mostrar cómo y porqué las instituciones existentes (o las recomendadas) son adecuadas para emplear el poder político en forma tal que lleguen a realizarse los valores constitutivos de la identidad de la sociedad. El que las legitimaciones sean convincentes o que la gente crea en ellas es algo que depende, a todas luces, de motivos empíricos.

De acuerdo al criterio de Habermas (1986), podemos percatarnos que es requisito indispensable el reconocimiento mayoritario de nuestros representantes, ya que está en ellos ejercer nuestra soberanía, es decir, nuestra voluntad mayoritaria por medio de una integración social que va más allá de una simple y única participación, además; que debe estar garantizada por las vías legales (situación ajena en México), construyendo nuestra identidad como sociedad por medio de la legitimidad.

En México, para lograr una legitimidad formal y sustancial en nuestras elecciones y gobierno, será necesario implementar un modelo de democracia participativa en donde la decisión la tenga la mayoría absoluta de la población y no sólo una mayoría simple (minoría proporcional). Ahora bien, al hablar de cualquier tipo y modelo de democracia, es importante saber qué modelo de democracia conviene más, en tanto garantice una mayor participación e incidencia de la ciudadanía y presumiblemente, una mayor aceptación mayoritaria cuantitativamente hablando, lo que a su vez debería implicar una mayor legitimidad, para las y los candidatos elegidos.

En este sentido, la legitimidad de quien ocupe la presidencia, en un país como el nuestro, de corte evidentemente presidencialista se hace no sólo necesaria sino fundamental como un elemento para garantizar la integración y armonía social.

Según (Corona Nakamura 2006; Orozco Henríquez 2006):

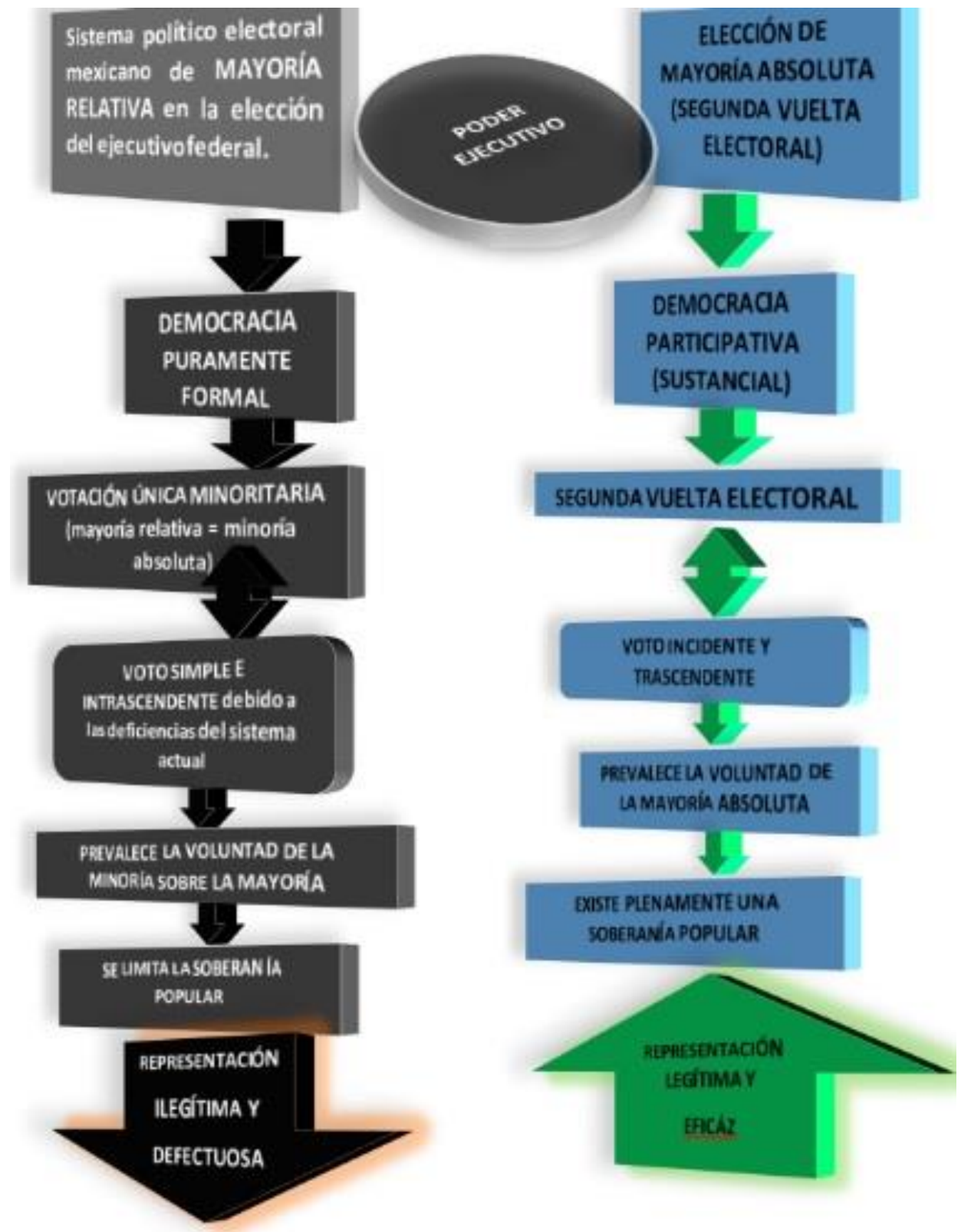
En el sistema electoral mexicano, para que las elecciones (tanto federales, como estatales) puedan ser calificadas como libres, auténticas y

periódicas, deben celebrarse con apego y respeto a diversos principios de rango constitucional, a valores y derechos fundamentales vinculados a nuestro sistema aparentemente democrático, sin los cuales, los comicios y sus resultados carecerían de legalidad. Como lo señala el autor Jesús Orozco Henríquez: identificar a todos aquellos principios que tutela en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que protege el Derecho Electoral mexicano y las instituciones de la democracia político-electoral, no sólo permite comprender la esencia y la función de esta materia, así como el significado de los comicios y sus resultados, sino que permite contar con mayores elementos para evaluar y proponer soluciones valorativas cuando se presenten indeterminaciones.

De acuerdo a la aportación autoral anterior, todo formalismo procedimental plasmado en la ley queda sin efecto al no llevarse sustancialmente en los procesos electorales de manera auténtica y con valores, por lo que dejaría de ser un proceso válido y democrático en los resultados finales. Lamentablemente, nuestro sistema electoral actual no nos permite tener una dualidad democrática, me refiero, a una democracia formal y sustancial a la vez.

Respecto a la dualidad democrática descrita, nuestra actual percepción y ejercicio de democracia en México se ha convertido puramente en formalista y no real, se necesita revalorar e implementar desde una nueva perspectiva que incluya fácticamente a la mayoría de la población y no sólo a unos cuantos en las decisiones finales de nuestro actual excluyente y deficiente sistema electoral. A manera de propuesta, se puede observar el siguiente modelo gráfico contextual, en el cual se hace una comparativa entre nuestro actual sistema político-electoral versus un sistema de mayoría absoluta por medio de una segunda vuelta electoral.

**Modelo gráfico contextual de propuesta.**



## **Importancia del enfoque interdisciplinar.**

Existen muchas investigaciones sobre temas electorales, legitimidad y democracia, no obstante, aún no se han realizado muchos estudios con perspectiva interdisciplinar en este ámbito, ya que al ser cuestión legal, se recurre en la mayoría de los casos, al estudio único de las normas, dejando fuera factores fundamentales que influyen e integran la democracia y legitimidad.

León (2015), señala la interdisciplina como la integración polifacética, coherente y sistemática de teorías y conceptos disciplinares para la resolución común de un problema complejo, ya que la interdisciplina se aplica únicamente para resolver problemas complejos en los cuales una sola visión o disciplina no basta para resolver un conflicto.

Partiendo desde la visión causal de la interdisciplinariedad, es decir, la necesidad de tener un problema complejo para poder aplicar una perspectiva integrativa como lo es ésta, es importante partir del concepto de complejidad, para comprender cómo y cuándo utilizarla (Newel, 2001).

La técnica que nos brinda Newel (2001), el cómo saber cuándo es un problema complejo y cuándo no para poder aplicar la interdisciplina, se conoce sólo si el problema no se alcanza a resolver de forma íntegra desde una sola perspectiva, es ahí cuando la interdisciplina puede intervenir para subsanar lagunas y lograr un entendimiento íntegro de distintas visiones.

Se puede afirmar que la interdisciplinariedad debe verse como un proceso que permite solucionar conflictos, comunicarse, cotejar y evaluar aportaciones disciplinares a la vez que sugiere la integración de datos sobre marcos epistemológicos integradores previos (León, 2015; Patry 2013; Repko 2008). Además; León (2015) afirma que la interdisciplina se nutre y existe gracias a las disciplinas integrantes en el objeto complejo de estudio. Situación que delimita las responsabilidades de las disciplinas y de la interdisciplina, toda vez que existe una relación armoniosa de cohesión disciplinar para poder llegar a una perspectiva interdisciplinaria y sin ella, simplemente no existiera.

Después de analizar distintos pasos y estrategias a seguir para el uso aplicativo y teórico de la interdisciplinariedad en los proyectos de investigación, desde una visión personal considero a tomar como adaptados a mis criterios los siguientes pasos que establece Repko (2008):

1. Definir el problema o la pregunta central.
2. Justificar el uso de la aproximación interdisciplinar.
3. Identificar disciplinas pertinentes.
4. Llevar a cabo la búsqueda de literatura
5. Desarrollar adecuaciones en cada disciplina pertinente.

6. Analizar el problema y evaluar cada perspectiva de ella.
7. Identificar los conflictos entre los puntos de vista y sus fuentes.
8. Crear o descubrir un terreno común.
9. Integrar conocimientos.
10. Producir un entendimiento interdisciplinario y probarlo.

Szostak (2007) sostiene que un elemento clave de la interdisciplinariedad es que este refleja una creencia que ha mejorado el entendimiento de problemas en particular, situaciones, y temas es posible integrando ideas de distintas perspectivas. Mientras que una creencia como esta no es siempre explícita en la literatura de la interdisciplinariedad, es al menos implícito en varias definiciones de interdisciplinariedad.

Incurсионando al estudio interdisciplinar respecto al tema de investigación de la presente tesis, señalo las disciplinas vinculadas a la resolución de este problema complejo:

Desde el punto de vista de la sociología: Los modelos de democracia de Jürgen Habermas y los conceptos de política deliberativa y legitimación, como concepto sociológico de brindar el sentido de conformidad o aceptación a una determinada acción humana y en la forma en que impacta en la sociedad. El concepto de “legitimidad” de Max Weber desde el nivel de aceptación, la perspectiva popular y el orden para establecer la confianza que se tiene en nuestras instituciones reguladoras.

En primer término y desde la visión sociológica de Habermas (2005), podemos establecer diferencias respecto a la influencia del ciudadano en el Estado entre la concepción liberal y la concepción republicana del proceso político; es menester precisar que según el artículo 40 Constitucional, México es una República Representativa, Democrática y Federal. Entre las distinciones de una visión y otra se encuentran que en la concepción liberal podemos encontrar un proceso que a partir de los derechos subjetivos que posee todo ciudadano, el cual, por medio de las elecciones se establece una integración social activa hasta formar una voluntad política común y mayoritaria, con la finalidad de tener influencia importante sobre el Estado a beneficio de los mismos ciudadanos, generando una legitimidad por parte de los ciudadanos. En contraste con la concepción liberal; en la republicana se cuenta con una previa supra-relación y autonomía de cierta forma por parte del Estado hacia los ciudadanos, donde el poder democrático del Estado no representa ningún poder originario (emanado de la soberanía popular) y por lo tanto no se cuenta con esa relación de incidencia ciudadano-estado, además; el poder republicano se legitima por la misma práctica de la autodeterminación formal.

En segundo término, de acuerdo a una edición y recopilación de textos de Max Weber (2000), en su teoría política afirma que el Estado, al igual que todas las agrupaciones políticas históricamente anteriores, es una relación de dominio de unos hombres sobre otros hombres, relación mantenida por la violencia legítima (o coercitividad) donde necesita para mantenerse, que los dominados se sometan a la autoridad que ellos mismos reclaman y aceptan como propia. Además, Weber (2000) parte de la interrogante ¿Cuándo y por qué se produce ese sometimiento?



Para responder a la interrogante que planea Weber, podemos partir de un primer momento en donde el mismo pueblo, como sujetos dominados o sometidos al Estado, eligen de forma soberana por medio de la voluntad mayoritaria a sus representantes y gobiernos de forma legítima, donde si existe aceptación por parte del pueblo, existirá obediencia hacia el estado, ciclo ideal para una democracia moderna.

Weber (2000), parte del desglose del dominio a partir de la “legitimidad” de un Estado. En primer lugar, la legitimidad de la costumbre refrendada por su constante validez y por la perenne actitud de hombres que la respeten (existe una supra relación casi inerte). Este es el dominio "tradicional" ejercido por los patriarcas y por los antiguos príncipes patrimoniales. En segundo lugar, Weber nombra un aspecto muy moderno y común que se da en la política electoral o partidista en la mayoría de los países aparentemente democráticos, se refiere a la legitimidad de la gracia (carisma) personal y excepcional, en la cual se crea una adhesión exclusivamente personal y la fe también personal en la aptitud que un individuo singular posee (o se considera que posee) para las intuiciones reveladoras, el coraje u otros atributos adjudicados al caudillo. Además, menciona que históricamente es una de las formas más antiguas de obtener la aceptación popular, ya que este poder Weber (2000) lo define de la siguiente manera: " El poder ‘carismático’ fue el practicado por profetas, o, en el campo político, por jefes guerreros designados, por grandes gobernantes surgidos de plebiscitos, por grandes demagogos, o por los jefes de partidos políticos”. Otra manera de legitimidad es la que se establece a partir de un “Estado de Derecho” donde las mismas normas se autolegitiman a sí y a los líderes de gobierno, Weber (2000) lo describe textualmente de la siguiente manera: “la legitimidad fundada en la ‘legalidad’, en la fe en la validez de normas legales y en la ‘idoneidad’ objetiva basada en preceptos de origen racional, a saber, en la actitud de obediencia a prescripciones de estatuto legal.”

De acuerdo a lo anterior, podemos establecer tres tipos de legitimidad que nombra Weber, como visiones modernas y muy recurrentes sustancialmente, donde en ocasiones la forma inerte de obediencia del mismo pueblo se da por la “costumbre” o “apatía ciudadana” como también podríamos llamarla, en una forma extraña de entender al ser seres racionales, pero muy común en México y otros países, donde el mismo pueblo aprueba y acepta el dominio sin tener la iniciativa de saber por qué o para qué. Otra forma interesante y recurrente sobre todo en los comicios electorales, es la legitimación por parte de la aceptación de un individuo o representante popular a partir de “la simpatía” o “carisma”, situación absurda en verdad, pero que tiene un gran nivel de efectividad en las campañas electorales aún en tiempos modernos, ya que todo depende del contexto en donde se implemente. Como tercera forma de legitimidad es la forma legal que establecen las leyes como regulación y coercitividad para aceptar distintos actos políticos y electorales, brindándose una soberanía del estado para el estado, modificando el concepto original de soberanía popular como una democracia legítima en un Estado.

Relacionando las tres perspectivas de Weber (2000), podemos percatarnos que las tres formas de legitimidad que nombra se dan en cualquier Estado y en cualquier contexto, siendo México un país que recurre muy frecuentemente a las tres formas de legitimación del poder y dominio.

Desde el punto de vista de la ciencia política: El estudio del modelo de “Democracia participativa” de Barber, (1995,2000) y Maiz (2004) y de la teoría general política de

Norberto Bobbio. Además de los aportes de Habermas (1999); el análisis en la creación, modificación y extinción de políticas públicas y mecanismos administrativos- electorales actuales, para poder garantizar un proceso electoral legítimo y eficaz, ligando la ciencia política con la sociología en el impacto social de las deficientes administraciones.

Podemos vincular disciplinas homogéneas por así decirlo como lo son la sociología y la ciencia política ya que una se complementa a otra, además; el derecho puede fungir como puente perfecto entre esas dos disciplinas para lograr un enfoque interdisciplinario e integral, logrando ver lo que desde la sociología y desde la ciencia política no se puede apreciar.

Desde el punto de vista del derecho: la “teoría garantista” de Luigi Ferrajoli, con la finalidad de analizar la legitimación desde un enfoque jurídico de la mano con la sociología y ciencia política, para evaluar si se cumple con un estado de derecho y una representación mayoritaria sustancial, que cumple con las garantías a las cuales todos tenemos derecho; y realizando una propuesta jurídico-social para lograr una regulación legal o incorporación real de la legitimación (vista desde la sociología, ciencia política y el derecho) en el proceso de elección del ejecutivo federal, debido a que legal y formalmente no sólo tenemos derecho a votar, sino a que nuestro voto incida y trascienda fácticamente, haciéndonos partícipes en una decisión final de una elección, además del deficiente e ilegítimo proceso actual en donde el voto prevaleciente en el resultado final de la elección en el ejecutivo federal mexicano, es el de una mayoría simple y no el de la mayoría absoluta, siendo en la mayoría de las ocasiones, subordinados y gobernados por una persona que la mayoría proporcional de la población votante no eligió, situación que se puede apreciar más clara si la revisamos con una visión interdisciplinaria.

La teoría de la democracia de Ferrajoli, señala un estado (país) constitucional caracterizado por una doble sujeción: formal y sustancial. Ferrajoli, siguiendo a Bobbio, dedica una parte para explicar sobre la diferencia entre gobierno sub lege o gobierno per lege. Es decir, entre un gobierno bajo la tutela de leyes (sub lege) y un gobierno a través de leyes (per leges). A su vez, el primero se divide en un gobierno con poderes otorgados por leyes (sentido débil o formal) y en un gobierno de poder limitado por leyes (en un sentido fuerte o sustancial). Con estas observaciones, Ferrajoli afirma que “el término ‘Estado de derecho’ usa aquí en la segunda de ambas acepciones; y en este sentido es sinónimo de ‘garantismo’. Por eso designa no simplemente un ‘estado legal’ o ‘regulado por la ley’ sino un modelo de Estado nacido con las modernas Constituciones” y cuyas características principales son la legitimación formal y legitimación sustancial (que se materializa en la garantía de los derechos fundamentales). Según (Moreno,2006; Ferrajoli,1998) se puede interpretar a Ferrajoli de la siguiente forma: el Estado de derecho fue entendido como un Estado que sólo demanda la legitimación formal; es decir una legitimación que proviniera de un poder otorgado por leyes y que sólo conmina al cumplimiento de una forma legal. Ahí está el peligro pues hasta los gobiernos totalitarios pueden revestir una forma legal. Por el contrario, los estados constitucionales exigen una legitimación sustancial; legitimación que pende de un contenido estricto en la limitación de poderes (Moreno 2006; Ferrajoli, 1998).

De acuerdo al criterio de Ferrajoli (1998), el estado que gobierna en un país debe tener una doble sujeción a las leyes, una sujeción formal (puramente a las leyes) y una sustancial (con la legitimación por parte del pueblo), en la mayoría de los Estados se cuenta con un estado

de derecho como ente regulatorio, sin embargo, esa legitimación de poder y de normas es simplemente formal, ya que las leyes se legitiman a sí mismas, a lo que podemos hacer alusión que el mismo estado puede formalizar situaciones opacas o ilegítimas en legítimas (formalmente hablando), pero no quiere decir que sean “correctas”, ya que la legitimidad de los actos de gobierno sustancialmente sólo se puede obtener por medio del reconocimiento y aceptación popular. Referente a esta teoría, al encontrarnos en un estado constitucional y aparentemente “garantista” como lo es México, para que podamos alcanzar una democracia como tal y en consenso con las teorías políticas más reconocidas a nivel mundial, debemos establecer además de una legitimación formal (como la que ya contamos); una legitimación sustancial en nuestros procesos electorales, específicamente en la elección del ejecutivo federal, al encontrarnos en un país evidentemente presidencialista, donde la legitimación de éste por medio de una democracia participativa se vuelve sumamente importante.

Según Luigi Ferrajoli (2001), en su Teoría de la democracia, define el concepto democracia como “un método de formación de decisiones colectivas; precisamente en el conjunto de las reglas que atribuyen al pueblo, y por lo tanto a la mayoría de sus miembros, además se atribuye al pueblo el poder directo o a través de sus representantes de tomar decisiones”. Es menester precisar que Ferrajoli (2001) hace mención que esa acepción no es sólo una definición etimológica, sino una concepción unánime compartida, desde Kelsen a Bobbio, de Schumpeter a Dahl, de las teorías y de las filosofías políticas.

En su teoría, Ferrajoli (2001) afirma que se puede llamar formal o procedimental a la definición de democracia antes expuesta, en la cual se identifica a la democracia sobre las bases de las formas y de los procedimientos idóneos para garantizar la voluntad popular. Es decir; sobre las bases del “quien” (el pueblo o sus representantes) y del “como” (la regla de la voluntad mayoritaria) en las decisiones.

Un aspecto que sería importante retomar de su teoría, y en relación a la propuesta del presente tema de investigación, es la mención de que incluso, un sistema que decidiera por mayoría la supresión de un acto o voluntad de una minoría, sería a partir de este criterio, totalmente “democrático”. Caso totalmente contrario en México, ya que de esta manera podemos relacionar el hecho de que actualmente contamos con un sistema electoral de mayoría relativa donde la voluntad de la minoría es la que prevalece sobre la mayoritaria, a manera de deducción, podemos decir que se contraponen a la conceptualización de democracia a que alude Ferrajoli en sus obras y teorías, además de contraponerse a la definición unánime compartida por la mayoría de las teorías políticas existentes.

### **Textos consultados:**

Adorno, T. et Horkheimer. (1969). La Sociedad, lecciones de sociología. Buenos Aires: Editorial Proteo.

Aguilera, R. (2011). 11. Revista de estudios jurídicos. Universidad de Jaén (España), 11, 1-31.

Beramendi, M. et Zubieta, E. (julio-agosto, 2014,). Construcción y Validación del Sistema Normativo. Revista Mexicana de Psicología, 31 N°2, 123-137.

Bernal, C. (2006, marzo 2). El concepto de libertad en la teoría política de Norberto Bobbio. Revista de Economía Institucional, 8, N°14, 75.

Bobbio. N. (2003,2005). Bobbio Teoria General de La Politica. Madrid: Editorial Trotta.

Cerroni, U. (1992). Política: Método, teorías, procesos, sujetos, instituciones y categorías. México: Siglo Veintiuno.

Carbonell, M. (2012). Luigi Ferrajoli: teórico del derecho y de la democracia. septiembre, 14, 2016, de Miguel Carbonell Sitio web:  
[http://www.miguelcarbonell.com/docencia/sobre\\_Ferrajoli.shtml](http://www.miguelcarbonell.com/docencia/sobre_Ferrajoli.shtml)

Fajuri, S., Martínez, G. et al. (2013). Democracia y Elecciones. Salamanca: Ratio Legis.

Ferraloji, L. et Bovero, M. (2001). Teoría de la democracia. Dos perspectivas comparadas.. México: Instituto Federal Electoral.

Gallego, F. (2008). Ética del discurso y teoría política. Sobre el concepto de legitimidad democrática. Medellín: Editorial Universidad de Antioquía.

Habermas, J. (1999). La Inclusión del Otro. Estudios de Teoría Política..Política. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Habermas, J. (1999). Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Madrid: Cátedra.

Habermas, J. (2005). Tres modelos de democracia. Sobre el concepto de una política deliberativa. Polis Revista Latinoamericana, 10, 10.

Hernández, Fernández y Baptista. (2014). Metodología de Investigación. México D.F: McGraw-Hill.

Hansson, B. (1999). Interdisciplinarity: For what purpose?. Policy Sciences, 32, 339-343.

Held, D. (1991). *Political Theory Today*. Stanford, California: Stanford University.

Instituto Nacional Electoral. (2006). Estadísticas Oficiales Elección Presidente de México 2006. 19 Septiembreseptiembre 2016, de Instituto Nacional Electoral Sitio web: [http://www.ine.mx/documentos/Estadisticas2006/presidente/gra\\_nac.html](http://www.ine.mx/documentos/Estadisticas2006/presidente/gra_nac.html)

Instituto Nacional Electoral. (2012). Cómputos Finales Elección a Presidente de México 2012. 19 de Septiembreseptiembre 2016, de Instituto Nacional Electoral Sitio web: <http://computos2012.ife.org.mx/reportes/presidente/distritalPresidenteEF.html>

Islas, A., Cienfuegos, D. et al. (2006). *Derecho Electoral Mexicano: Perspectivas para una nueva reforma*. México: Universidad Autónoma de Nuevo León.

Klein, J. (2013). "The State of the Field: Institutionalization of Interdisciplinarity". *Issues in Integrative Studies*, (31), 76-74

Katz, C. (2001). Response: disciplining interdisciplinarity. *Feminist Studies*, 27 N°2, 519-525.

Karl, W. (1976). *Política y Gobierno. Cómo el pueblo decide su destino*. Madrid: FCE España.

Laclau, E. et Mouffe, C. (1987). *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia*. Madrid: Editorial Letrae.

León, G. (2015). Transformaciones en el campo de estudios de la Comunicación en América Latina. Perspectivas epistemológicas y éticas en torno a la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento. Conferencia Magistral. FELAFACS 2015. Medellín, Colombia, 7 de octubre de 2015. Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social-Universidad de Antioquia.

León, G. (2016). Probando modelos interdisciplinarios inclusivos en la dependencia de Internet en Jóvenes. Nuevas variables asociadas. *Revista Latina de Comunicación Social*, 71, 616 a 631.

Loeza, S. y Prud'homme, J.F. (2010). *Instituciones y Procesos Políticos*. México D.F.: El Colegio de México A.C.

Moreno, R. (2006). Democracia y derechos fundamentales en la obra de Luigi Ferrajoli. *Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política*, 3, 3-39.

Newell, W. (2013). "The State of the Field: Interdisciplinary Theory". *Issues in Integrative Studies*, (31), 22-43.

Orozco, J. (2005). Justicia Constitucional Electoral y Garantismo Jurídico. *Cuestiones Constitucionales*, 13, 151-203.

Peñas, P. (2011). Barber y la idea de democracia fuerte. *Revista Tales*, N°4, 279-290.

Porrua, F. (1982). Teoría del Estado, Teoría Política. México D.F.: Editorial Porrua.

Patry, J.L. (2013). Beyond multiple methods: critical multiplism in all levels. *International Journal of Multiple Research Approaches*, 7, 50-65. 2016, agosto, de base de datos.

Payne, S. (1998). Interdisciplinarity: Potentials and Challenges. *System Practice and Action Research*, 12 N° 2, 173-182.

Repko, A. (2008). *Interdisciplinary Research. Process and Theory*. Sage: California.

Rúa, C. (2013). La legitimidad en el ejercicio del poder político en el estado social de derecho. *Ius et Praxis*, vol.19 no.2, 14.

Sartori, G. (2003). ¿Qué es la democracia?.democracia? México D.F.: Santillana Ediciones.

Sylvia Zavala Trías. (2010). Guía a la redacción en el estilo APA, 6ta edición. Universidad UMET Metropolitana, 14.

Szostak, R.. (2007). Modernism, Postmodernism and Interdisciplinarity. *Issues integrative studies*, 25, 32-83.

Szostak, R. (2013). "The State of the Field: Interdisciplinary Research". *Issues in Integrative Studies*, (31), 44-65

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2011). Derecho electoral mexicano. México, D.F: Poder Judicial de la Federación.

Villafuerte, L. (2008). Participación Política y Democracias Defenctuosas. El Barzón, un caso de estudio, Veracruz 1993-1998. Xalapa, Veracruz: Ediciones Arana.

Weber, M. (2000). Política y Ciencia. [www.elaleph.com](http://www.elaleph.com): Ediciones elaleph.com.